

EL CONCEPTO DE MOVIMIENTOS SOCIALES: UN BALANCE INICIAL SOBRE SU EMPLEO EN MÉXICO (1970-1996)

Alberto J. Olvera Rivera

Artículo publicado en el libro "Movimientos Sociales. Desafíos Teóricos y Metodológicos. Ediciones de la Universidad de Guadalajara. México, 1999. Páginas 109-135.

INTRODUCCIÓN

En este trabajo se presenta un balance inicial sobre el significado que se le ha dado al concepto de movimiento social en México en los años recientes. En tanto que una crítica a las ideas dominantes sobre un tema implica siempre asumir una perspectiva alternativa, conviene explicar que hemos fundado nuestras ideas en los recientes desarrollos de las teorías de la sociedad civil y en la obra de Alberto Melucci. Sin embargo, optamos por no movernos dentro de un marco exclusivamente conceptual, sino construir al mismo tiempo una crítica y una interpretación empírica alternativa. Sin duda, este objetivo requiere una calificación. No se trata de crear nuevas teorías, ni de decir que lo hecho hasta la fecha no tiene relevancia; por el contrario, la investigación sobre movimientos sociales en México es rica y compleja. Se pretende simplemente hacer una crítica informada que nos permita visualizar nuevos caminos a ser explorados.

En el limitado espacio de estas páginas hemos seguido las tendencias dominantes de interpretación sobre movimientos sociales, sobre todo al nivel de los propios actores. Al proceder así, estamos corriendo el riesgo de no hacer justicia a quienes han hecho aportes críticos. Insistimos: el nuestro no es un balance exhaustivo, sino una primera lectura que pretende ofrecer un insumo para una polémica que hoy se antoja indispensable.

En la primera parte de este texto se lleva a cabo, de un modo muy sintético, un diagnóstico de la evolución de los movimientos sociales en México, desde 1970 hasta 1990, y una evaluación de la forma en que los analistas y los actores sociales mismos los entendieron. En la segunda parte se estudian los años noventa y se resaltan los retos analíticos planteados por la emergencia de la forma de identidad colectiva centrada en el discurso de la sociedad civil. Finalmente, en la conclusión se propone una vía posible de integración del concepto de movimiento social en la noción de sociedad civil.

La idea de movimiento social ha sido usada en México, como en todas parte, para describir una generalización empírica. Muy diversas clases de fenómenos son designados con esta categoría general. Para convertirla en una categoría analítica

debemos acotar su significado, mas no a la Touraine, reduciéndola a aquellas formas de acción colectiva que cuestionan la historicidad. Preferimos tomar como background la definición un tanto más general de Melucci: es una forma de acción colectiva que "i) invoca solidaridad; ii) manifiesta un conflicto; iii) conlleva una ruptura de los límites de compatibilidad del sistema dentro del cual la acción tiene lugar" (1996:28). Por tanto, no todas las formas de acción colectiva constituyen un movimiento social. El punto crítico es definir el sistema de acción concreto y el momento o el grado en que sus límites se rompen.

Para los fines de este trabajo preferimos asumir una interpretación no restrictiva de esa noción. En la medida que México vive una fase de transición en su régimen político y profundas transformaciones sociales, económicas y culturales tienen lugar, los sistemas de acción están en flujo y, por tanto, es difícil precisar sus límites de tolerancia. En cada caso mostraremos cómo entendemos esta condición.

Nuestro argumento en esencia es el siguiente: la multiplicidad semántica de la noción de movimiento social se debe o fue empleada como una manera de describir toda forma de acción colectiva, en especial la proveniente de los sectores populares. Esta situación se asocia, desde la década de los años setenta, al predominio de formas de interpretación fuertemente influidas por un marxismo estructural, las cuales reificaban las acciones colectivas considerándolas como una mera respuesta a tensiones estructurales en la sociedad (la crisis urbana, la crisis agrícola, etcétera), o bien como resultado de la esencia transformadora implícita en la propia naturaleza de los actores sociales (el carácter revolucionario de los pobladores urbanos, etcétera).

Por otra parte, el interés teórico acerca de los movimientos sociales (casi siempre meramente enumerativo de las teorías disponibles) no se correspondió con una aplicación empírica sistemática del concepto. La fuerza de la influencia tourainiana en México dejó a los analistas en la perplejidad, pues dentro de esa perspectiva sólo unos cuantos movimientos de orden urbano-cultural podían ser entendidos como movimientos sociales en sentido estricto, y eso aún con reservas (el ecologista, el feminista). La escasa influencia de la escuela de movilización de recursos ha resultado en este sentido lamentable, pues el estudio de la composición de la dirigencia de los movimientos, de los recursos humanos y materiales de que disponen, y de los espacios, repertorio de acción y demandas de la movilización colectiva hubiera permitido matizar la atribución de propiedades revolucionarias a los movimientos populares políticamente autónomos del Estado y moderar su interpretación como formas nuevas de la acción colectiva.

Paralelamente, el debate centrado en la clasificación de nuevos y viejos movimientos sociales fue ilustrativo de los alcances y limitaciones de la falta de una conceptualización rigurosa (Craig y Foweraker 1990). En ese debate las formas de movilización y sus contextos históricos adquirieron preeminencia sobre los contenidos culturales y las formas de autocomprensión de los actores. La dimensión hermenéutica del análisis, tan resaltada en los escritos recientes de Alberto Melucci, se perdió en aras de una especie de objetivismo formal dentro del cual el debate sobre lo viejo y lo nuevo no tenía salida, además de que se centraba en un falso problema.

En los años noventa, el interés teórico sobre los movimientos sociales ha permanecido, pero sin superar los obstáculos antes mencionados. La emergencia de la arena político-electoral como nuevo espacio privilegiado de la lucha política y la aparición de movimientos urbano-culturales de carácter ciudadano en el contexto de una profunda transformación neoliberal del Estado y de la economía, condujeron a la pérdida de centralidad de las viejas formas de la movilización popular, a la derrota de los movimientos clasistas, a la disolución de los anteriores espacios de lucha que combinaban la acción social y la acción política, y a la aparición de nuevos actores sociales.

Los movimientos sociales recientes en México han cambiado tanto en su composición, sus formas de autocomprensión y su carácter, como en su relación con el sistema político. Las interpretaciones académicas de estos procesos parecen permanecer atadas, sin embargo, a las viejas concepciones. Una posible vía de salida de este problema sería combinar los aportes de las recientes teorías de la sociedad civil con una aplicación no dogmática de las teorías disponibles sobre movimientos sociales.

I. La fase de reificación de los movimientos populares: las décadas de los setenta y ochenta.

Durante estas décadas, los únicos movimientos sociales considerados dignos de ese nombre fueron los populares clasistas y básicamente aquellos que reclamaron su autonomía frente al Estado. El hecho de que la atención se centrara en este tipo de movimientos y se les reificara como unidades homogéneas tuvo que ver con la influencia del marxismo estructural, la debilidad de los análisis de corte cultural y, ante todo, con la determinación histórica derivada de la hegemonía del corporativismo en México.

En efecto, si algo definió al régimen de la Revolución Mexicana fue su capacidad para mantener en el largo plazo la fusión entre Estado, mercado y sociedad (Olvera 1995). El perfeccionamiento del modelo corporativo trajo como consecuencia la sobrepolitización de las relaciones sociales, es decir, condujo a que las relaciones laborales, las sociales y mercantiles en que se insertaban los campesinos minifundistas y casi todas las formas de asociación gremial estuvieran mediadas por la intervención del Estado o fueran formas de integración política en el régimen.

En este contexto toda lucha por la autonomía organizativa de actores sociales populares adquirió un carácter político y tuvo como interlocutor necesario y con frecuencia como enemigo directo al propio Estado. En esas condiciones, la sobrepolitización de las propias luchas autonómicas resulta bastante comprensible. Más aún, dado que el régimen de la Revolución mexicana asumió discursivamente la defensa y promoción de los derechos sociales, la lucha contra el Estado sólo pudo

fundarse en una crítica contrafactual, la cual implicaba tener como trasfondo un marco ideológico todavía más radical que el del propio régimen.

Esta determinación histórica de naturaleza político-cultural llevó a lo largo de esos años a un cierto maximalismo en las perspectivas estratégicas de los movimientos populares, que por la misma razón fueron fácilmente colonizados por distintas corrientes de izquierda. Era muy difícil hallar una forma no política de lucha por los derechos sociales en las condiciones de corporativismo generalizado e inexistencia de espacios sociales intermediarios entre actores sociales y Estado, como la esfera pública (aún muy limitada), el parlamento y un sistema de partidos.

Esta tendencia a visualizar movilizaciones locales y sectoriales como componentes de un actor colectivo definido en términos de clase hacía caso omiso del particularismo local que muchas de esas acciones colectivas representaban y, ante todo, impedía descubrir si de esas acciones emergían realmente nuevas formas de identidad colectiva. Las combinaciones específicas entre viejas y nuevas formas de identidad fueron así subsumidas en la imagen de un movimiento como totalidad homogénea cuya única voz era la de las líderes visibles. Mientras tanto, otros cambios en la sociedad, sobre todo las formas de acción colectiva de empresarios y clase media, que implicaban significativos cambios culturales, fueron emprendidos desde una perspectiva que no empleaba la noción de movimientos sociales.

Esta forma de aproximación a la realidad fue reforzada por la aparición de las grandes coordinadoras de masas de fines de los años setenta y principios de los ochenta. La tendencia a tomar la voz de los líderes como expresión del contenido de los movimientos alcanzó su cúspide. Caso paradigmático es el del movimiento urbano-popular, el cual, a lo largo de los primeros congresos de la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular (CONAMUP), se conceptuó a sí mismo como un movimiento con potencial revolucionario (Moctezuma 1984). No es difícil descubrir en el carácter de esas discusiones la influencia decisiva de los activistas de distintos grupos y corrientes de izquierda, que de esta manera legitimaban su autoasumida misión histórica.

Como resultado de esta situación, el estudio del sistema de acción en que se insertaban los movimientos urbano-populares se diluyó en postulados normativos. Cuáles eran los puntos en los que en verdad el sistema político o el mercado urbano eran subvertidos o cuestionados, en qué forma o hasta qué punto eran preguntas que no se planteaban o se respondían apelando a principios abstractos. Además, los potenciales propiamente culturales de ese tipo de movimientos sólo habrían de ser rescatados a partir de la experiencia de los sismos de 1985, cuando los pobladores del centro histórico de la ciudad de México hicieron valer su sentido de identidad local para evitar su desalojo y la reconversión del uso del suelo.

Pero aun esta cualidad identitaria de cierto tipo de movilizaciones urbanas fue tomada básicamente como una demostración de resistencia heroica frente a la

insensibilidad e irresponsabilidad del Estado. La rica gama de referencias identitarias locales, el recurso a viejas y complejas redes de parentesco, paisanaje, compadrazgo y formas diversas de autoayuda raramente fueron consideradas como objeto de análisis legítimo que mostrara la complejidad sociocultural implícita en el movimiento y los distintos niveles de acción contenidos en su interior.

Algo similar sucedió en esa época con el movimiento campesino, el cual fue interpretado por los analistas como una continuidad histórica con los movimientos campesinos por la tierra que habían caracterizado las décadas posteriores a la Revolución mexicana (Bartra 1985). Sin embargo, el manejo simbólico de derechos históricos consagrados (como el derecho a la tierra) reflejaba la ambivalencia del movimiento campesino en relación con el régimen. Por un lado, se le reclamaba la efectivización de un derecho existente, y se reconocía entonces la legitimidad del régimen que lo aceptaba de manera simbólica, pero, por otro, se le criticaba contrafactualmente por no cumplir con sus propios postulados. De esta manera, siempre era posible pensar que las condiciones locales reflejaban el carácter incompleto de la Revolución mexicana, mas no su agotamiento histórico. Las organizaciones campesinas tendieron a radicalizarse hacia finales de los años setenta, cuando el discurso de las organizaciones empezó a sostener que el proyecto histórico de la Revolución mexicana sólo podría completarse haciendo una nueva revolución. El grito de batalla de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) fue el de "hoy luchamos por la tierra, mañana por el poder" (1980), el cual reflejaba esa disposición radical. Pero entre esta declaración discursiva, la práctica política efectiva y la autocomprensión real de los campesinos a nivel de base había un abismo, al igual que en el caso del movimiento urbano-popular.

El tránsito hacia una estrategia de autonomía económica de empresas campesinas (el "cambio de terreno"), a partir de principios de los ochenta marcó el momento de la emergencia de un nuevo liderazgo campesino. Ahora los dirigentes eran profesionistas de origen rural fuertemente influidos por –o militantes de– diversas corrientes de izquierda, en especial las maoístas. Si bien la nueva estrategia era no fundamentalista, varios factores determinaron que el cambio de perspectiva no deviniera en la emergencia de nuevas identidades colectivas firmes. Para empezar, la complejidad técnica implícita en la administración de empresas regionales y la necesidad de negociaciones frecuentes con entidades del gobierno condujeron a la reproducción de las viejas prácticas de centralización de la dirección en los líderes y al surgimiento de contradicciones internas en las organizaciones derivadas de intereses mercantiles o de la falta de claridad en las responsabilidades administrativas. Pero más importante aún fue el hecho de que la nueva estrategia abrió un terreno de lucha en donde los enemigos del pasado no existían ya y donde la noción de derechos sociales sustantivos había desaparecido (Olvera y Millán 1994). En el nuevo sistema de acción los cuestionamientos pasaban a ser internos, y no hacia el contexto político exterior. Sólo en aquellos casos en que se afectaron de modo sustancial fuertes intereses de acaparadores-caciques, este tipo de acción resultó en un cambio social significativo en el plano local.

Sin embargo, las identidades formadas a partir de esta estrategia no eran gremiales, pues las empresas eran locales y a veces abarcaban varias ramas de la producción, y no eran regionales, pues en realidad la mayoría de las empresas no encontraron la manera de sustituir el modelo de compra local característico de los acaparadores privados. Se reforzó así el carácter localista de las identidades

campesinas e incluso se crearon o reforzaron las divisiones internas de las comunidades (Olvera et al. 1996). Sólo unos cuantos casos fueron en realidad exitosos en el plano económico y sirvieron como eje de una resistencia política a los poderes fácticos locales. En estas condiciones, el movimiento social nacional, si bien en algunas regiones y períodos sin duda se constituyó en un movimiento que rebasó los límites del sistema político de acción.

En otro orden, las maneras de articulación de las nuevas organizaciones en forma de redes pareció en su momento prefigurar un nuevo patrón igualitario de unidad en la acción, tal como reclamaba la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA) (Moguel et al. 1992). Lo único negativo en términos identitarios fue que esta asociación fue fundamentalmente un acuerdo de dirigentes, sin que las bases tuvieran forma de participar en ella o de por lo menos entenderla. Si bien, la UNORCA tuvo el potencial de ser una forma alternativa (no corporativa y políticamente plural) de unidad en la acción de las organizaciones campesinas, la decisión de sus líderes de llevar adelante su causa a través de un pacto con un grupo salinista determinó el estrechamiento de sus márgenes de acción política y la hegemonía de una visión de la política como negociación intraélites. No es extraño que de la UNORCA salieran los principales cuadros dirigentes campesinos del proyecto salinista de recomposición de las bases sociales de apoyo del régimen (Olvera 1997).

El movimiento sindical conoció un breve período de auge a mediados de los setenta gracias a una relativa liberalización del monopolio corporativo promovida por el presidente Luis Echeverría (1970-1976). Después de esos años, el movimiento obrero volvió a ser el único espacio de acción social totalmente cerrado a cambios jurídicos y políticos. El sindicalismo no fue influido de modo tan significativo por las corrientes de izquierda. Distintos grupos radicales trabajaron en el gremio magisterial, en los sindicatos de la industria acerera, y en numerosas fábricas de ramas diversas de la producción. Invariablemente se confrontaron con el núcleo más duro del poder corporativo del Estado y salieron derrotados después de librar importantes batallas. Mejor suerte tuvieron las vertientes más sindicalistas y en principio antipolíticas del movimiento sindical autónomo, como la Unidad Obrera Independiente (UOI), que con notable eficacia extendió su control sobre la industrial automotriz y el sindicato del autotransporte en el Distrito Federal (Midelebrook 1995). Lo mismo puede decirse del sindicalismo universitario, el cual pasó a ser dirigido por activistas del Partido Comunista, sin que esto significara la fundación de un modelo sindical alternativo, como la práctica ha demostrado. La conjunción de derrotas y de rutinización de los sindicatos independientes impidió la constitución de un movimiento social duradero en el seno del sindicalismo mexicano (De la Garza 1992a).

Un déficit interpretativo en los estudios sobre los movimientos sociales de esta época fue el de no haber percibido la especificidad del movimiento social más novedoso de la época, que era el de la intelectualidad urbana radical. En efecto, la continuidad histórico-cultural entre el vasto movimiento estudiantil de los años setenta y la notable expansión y crecimiento de grupos de izquierda fue marginalmente analizada. Sin embargo, el carácter nacional del radicalismo estudiantil e intelectual en los años setenta y principios de los ochenta demuestra la fuerza e impacto de ese auténtico movimiento social de carácter cultural, que fue

el que dio origen a la izquierda contemporánea mexicana y que explica también el desarrollo de muchos movimientos populares de la época (Moguel 1987).

Cabe insistir en que dentro de los movimientos populares convivían diversas influencias y tendencias y que, al igual que todo movimiento social, no eran un todo homogéneo ni su naturaleza estaba fijada por puras determinaciones estructurales. En un plano muy general, puede decirse que el movimiento urbano popular, el campesino y el obrero independiente fueron el resultado de la confluencia de dos diferentes tipos de movimientos sociales: por un lado, el de orden urbano-cultural representado por las fracciones radicalizadas de la intelectualidad universitaria y, por otro, la activación propia y natural de los movimientos populares derivada de la apertura de una fase de liberalización política a partir del gobierno de Luis Echeverría.

A su vez, esta confluencia tomó formas y expresiones en sumo grado diversas en el tiempo y el espacio. En algunos casos, los actores urbano-culturales se transformaron en dirigentes populares y trataron de negar su propia identidad al materializar su misión de "ir al pueblo". Principalmente, los maoístas pensaron que al vivir en las colonias populares, en los barrios obreros o en las comunidades campesinas su vieja identidad urbano-cultural se diluiría en las identidades populares. Como resultado, hubo actitudes esquizofrénicas en la izquierda en las que el voluntarismo canceló un mínimo de objetividad analítica. Esta negación a reconocer la realidad fue compartida por la mayoría de los analistas de los movimientos sociales, cuyas narrativas con frecuencia hicieron caso omiso de la diversidad implícita en la composición de los movimientos sociales y del carácter político de su dirigencia.

En otro orden, puede considerarse que a lo largo de los ochenta hubo un fuerte prejuicio en contra de movimientos sociales de carácter conservador o que tenían como actores centrales a las clases medias urbanas o a los empresarios. Sin embargo, debe reconocerse que uno de los movimientos sociales más significativos a partir de mediados de los años setenta fue al creciente autonomización política de los empresarios medianos del norte y occidente del país y el creciente activismo de las clases medias urbanas de esas mismas regiones, golpeadas con dureza por las sucesivas devaluaciones y la ineficacia gubernamental. En ambos casos, los viejos sistemas de acción fueron cuestionados, sea como ruptura del control corporativo empresarial o como crítica del modelo privatístico y pasivo del rol público de la clase media. Si bien diversos analistas estudiaron a los empresarios, los cambios sucedidos en las clases medias fueron muy poco evaluados. Lo mismo puede decirse de la mayoría de los movimientos de carácter conservador vinculados a la jerarquía católica, que no merecieron el interés de los científicos sociales y que, sin embargo, resultaron fundamentales para abrir el período de insurrección político-electoral iniciado en Chihuahua en 1983.

Los movimientos urbanos de carácter conservador produjeron una mutación cultural de indudable importancia al cuestionar el monopolio de la política por parte del partido oficial y al asumir la posibilidad de gobernar sus localidades utilizando para ello la vía electoral (Tarrés 1986). Los alcances de este movimiento aún no se han agotado, puesto que los sectores medios y empresariales de otras

partes del país apenas se están incorporando a esta tendencia. La naturaleza de los cambios culturales implícitos en un patrón de respuestas colectivas que se articuló en una nueva vocación por la política y la protesta pública no ha sido analizada. En efecto, las clases medias del norte iniciaron una práctica asociativa que significó una ruptura con una vieja tradición de privatismo, la cual debe ser considerada un importante cambio cultural por más que éste se haya producido en sectores muy conservadores y tomando como referencia el rescate de normas y valores tradicionales.

Haciendo un balance de cómo se interpretó en México la naturaleza de los movimientos sociales en los setenta y en los ochenta cabe señalar que destacan tres características fundamentales.

1) La categoría de movimiento social fue asimilada a la del popular y, en segundo lugar, incluyó también al estudiantil. Esta operación intelectual implicaba que se consideraba como movimiento social sólo aquel tipo de acción colectiva del que se asumía por razones normativas que tenía un sentido transformador y revolucionario.

2) Esta asimilación se acompañó de la reificación de los movimientos populares al entenderlos como entidades homogéneas y analizarlos básicamente a partir del discurso de los líderes y sus acciones de protesta. No se analizó su complejidad interna ni la de los sistemas de acción en que se ubicaban. No se percibió o no se evaluó el hecho de que en su seno convivían en realidad dos tipos de movimientos sociales.

3) Se ignoró casi por completo todo un tipo de movimientos sociales de gran relevancia para la historia política contemporánea del país, como son los de las clases medias y los de empresarios.

II. La desaparición de las viejas referencias y actores y la emergencia del discurso de la sociedad civil.

En 1988, la sorpresiva insurrección electoral que acompañó el súbito ascenso del cardenismo, cambió radicalmente los parámetros de la acción política y creó por primera vez para la izquierda la posibilidad de propiciar un cambio de régimen por la vía electoral. Esta nueva coyuntura coincidió con la derrota estratégica del sindicalismo independiente (por más de que la resistencia continuara viva en el magisterio y en parte de la industria automotriz), con la virtual desaparición de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) y la consolidación de la tendencia dominante de carácter económico en el movimiento campesino. Al mismo tiempo, el movimiento urbano-popular entraba en una fase de rutinización y decadencia.

En un primer momento, el fenómeno del cardenismo creó en la izquierda una nueva ilusión: la del colapso del régimen a partir de la resistencia civil. Cuando se percibió que no estaba a la orden del día la autodestrucción o la deposición del régimen, la izquierda confió demasiado en un triunfo electoral inmediato, y se consideró a sí misma una mayoría política virtualmente automática. Las consecuencias de este autoentendimiento fueron severas, pues la mayoría de los dirigentes de los movimientos sociales populares autónomos invirtieron su capital político en campañas electorales y pasaron a dedicar buena parte de su tiempo a las luchas intestinas dentro del naciente PRD, ya que consideraron que en ese momento se definían acomodamientos definitivos en la perspectiva del inevitable destino de la izquierda: en condiciones democráticas, se convertiría de inmediato en gobierno.

Esta manera de entender la coyuntura condujo a una nueva forma de sobrepolitización de los movimientos sociales populares. Si antes sus direcciones apostaban todo a una especie de revolución futura y tendían por ello a la confrontación en las luchas inmediatas, ahora los movimientos fueron entendidos como clientelas políticas cautivas. La vieja tradición mexicana de fundir lo social y lo político fue reproducida una vez más por la izquierda, que siguió así la herencia del corporativismo del régimen político mexicano.

El nuevo interés en la acción político-electoral y la centralidad que adquirieron los conflictos postelectorales en el país, condujeron a una pérdida de visibilidad de los movimientos populares en cuanto tales, los que además habían entrado ya en una fase de franco declive. Su dirección política trasladó al plano electoral el eje central de sus preocupaciones y conflictos. Los analistas sociales también se concentraron crecientemente en esta nueva arena de lucha y descuidaron el estudio de los cambios en la sociedad.

Si bien la derecha no tuvo el éxito esperado en el plano electoral nacional en 1988, el PAN alcanzó una nueva consolidación organizativa y estableció vínculos estructurales firmes con los distintos grupos conservadores ligados a la jerarquía católica y con los grupos emergentes de empresarios del norte y occidente. En este sentido, el PAN logró nutrirse de las élites emergentes surgidas de las asociaciones civiles de carácter conservador, la mayoría nacidas o fortalecidas al calor de la nueva tradición de protesta pública que surgió junto con la crisis estructural de los ochenta.

A su modo, la derecha también político relativamente la lucha social al canalizar a la vía electoral las viejas formas de resistencia civil conservadoras. El efecto de este proceso fue que la tradicional falta de visibilidad de las asociaciones conservadoras se acentuó al optar éstas por la vía electoral como forma de generalizar en el ámbito social sus valores, principios y objetivos. Ya no se trató entonces de apelar a las conciencias ciudadanas a través de la esfera pública, sino de imponer, desde el ejercicio del gobierno y por la vía de la reglamentación del orden público, un estilo de vida conservador legitimado dentro del marco de la noción del "buen gobierno".

El paso de la centralidad de la esfera societal a la política, a partir de 1988, expresa el cambio de perspectiva de las élites político-culturales mexicanas, que decidieron aceptar la vía electoral como forma civilizada y pacífica de propiciar el cambio de régimen. Los analistas de las transiciones a la democracia han señalado reiteradamente la naturaleza de este ciclo, en el cual a una gran movilización social en el arranque del proceso de liberalización sigue una fase de normalización política y creciente centralización de las negociaciones al interior de las élites políticas (O'Donnell y Schmitter 1986). Por supuesto, esto no es un proceso fatal, sino responde a una opción consciente de las propias élites.

Entre tanto, el gran movimiento sociocultural urbano de los años setenta, a saber, el radicalismo estudiantil-intelectual, se fue debilitando en los ochenta por la progresiva pérdida del fervor revolucionario que antecedió al colapso del socialismo en 1989. Luego se transformó en un movimiento partidario que optó por la lucha electoral, y abandonó en cierta forma su anterior vocación por la dirección de movimientos sociales populares. Otra vertiente de este movimiento, que expresa también el desencanto revolucionario, ahora pos89, se habría de expresar en la explosión de organizaciones no gubernamentales.

Dos factores de orden estructural han sido decisivos también en el aparente colapso de los movimientos sociales de la década anterior. Se trata de los efectos del ajuste neoliberal sobre el tejido social, por un lado, y de los esfuerzos sistemáticos del gobierno salinista por crear un vínculo directo entre grupos sociales emergentes en el plano local y el gobierno federal, es decir, una modernización del corporativismo tradicional, por otro.

Los efectos disgregadores del ajuste neoliberal no son desconocidos para nadie. Han sido ampliamente documentado el hecho de que la política económica neoliberal condujo a un aumento del desempleo, al desmantelamiento de contratos colectivos, a la pérdida de influencia del sindicalismo, a la inviabilidad económica de la producción campesina, al aumento de la economía informal y la marginalidad urbana, al incremento de la emigración y a la acentuación del privatismo como conducta dominante en el plano colectivo.

Evidentemente, los brutales efectos del ajuste neoliberal minaron los fundamentos sociales y económicos de las viejas formas de identidad colectiva y redujeron los espacios de maniobra en que por costumbre se habían movido la mayoría de los movimientos sociales populares. El colapso del viejo y del nuevo movimientos sociales populares. El colapso del viejo y del nuevo movimiento campesino independiente, del sindicalismo en general y el abatimiento relativo del movimiento urbano-popular tienen como trasfondo el ajuste neoliberal. Sin embargo, el colapso de las viejas formas de lucha y de organización no significa la desaparición de toda clase de acción colectiva ni la anulación de toda resistencia social. Más bien, atestigüamos un cambio de forma cuya percepción ha demostrado ser difícil.

La centralidad de los movimientos sociales populares en la imaginería de izquierda derivaba de dos causas fundamentales: por un lado, de la asignación ideológica de cualidades transformadoras a la acción colectiva popular y, por otro, de la capacidad de coordinación y centralización de la dirección de la lucha por parte de activistas profesionales de izquierda. Dentro de esta concepción se incluía también la hegemonía de formas expresivas de lucha arraigadas con fuerza en la cultura política nacional; las manifestaciones, las tomas de oficinas públicas, los mítines prolongados, las grandes marchas del campo a la ciudad. Estos tipos de movilización acentuaban el dramatismo de la protesta social y portaban el simbolismo de poner al pueblo en las calles como una forma de cuestionar el reclamo del régimen de ser el único y verdadero representante del pueblo mexicano.

Para nadie es un secreto el alto costo económico y personal de la movilización colectiva. El desgaste que viene de su sobreutilización es bastante evidente, sobre todo en relación con los magros resultados que se obtienen. Sin embargo, la izquierda ha seguido atendida casi en exclusividad a esta forma de lucha, sólo que la ha trasladado del ámbito de lo social al terreno político-electoral.

La sensación de derrota de los movimientos sociales que se percibe en los tiempos recientes, tiene que ver también con el hecho de que durante el gobierno salinista el régimen logró abrir canales particulares de negociación para los actores colectivos urbanos y creó formas expeditas de atención a las demandas de movimientos campesinos regionales y nacionales. Se trasladó, así, del ámbito de la confrontación pública al de la negociación privada de la resolución de los principales conflictos. Sin duda, esta práctica, que incluyó también la cooptación sistemática de la izquierda maoísta a través del Programa nacional de Solidaridad (Pronasol), no significó que los campesinos vieran realmente satisfechas sus demandas ni la resolución de los problemas urbanos, sino tan sólo su canalización y neutralización efectivas. En otras palabras, se creó un nuevo sistema de acción para tratar las demandas populares que se fundó en su despolitización relativa y en su refuncionalización mediante una vía clientelar novedosa.

La conjunción de todos los factores mencionados explica la pérdida de centralidad de los movimientos sociales populares como forma de concebir la lucha social y representar los intereses de las propias clases populares. Sin embargo, esto no significa que los campesinos, los trabajadores urbanos industriales hayan cesado de resistir, sino que cambiaron los terrenos y las maneras de hacerlo en el contexto de una situación abiertamente desfavorable a sus intereses y en la nueva circunstancia de que su vieja dirección política profesional o se integró al Estado o se concentró de modo creciente en el ámbito de la acción política.

En estas condiciones, las luchas populares tendieron a expresarse en su forma más normal y natural: como luchas ancladas en el territorio, de naturaleza sectorial o temática y sin pretensiones de generalización de derechos o de la transformación política global. En otras palabras, las formas de resistencia se trasladaron a los espacios locales, se canalizaron por la vía de la negociación directa entre actores interesados e instituciones estatales correspondientes y se

perdió la capacidad de articulación nacional que en un momento dado llegaron a tener las organizaciones por la vía de los pactos entre grupos de izquierda. En suma, la acción colectiva popular continúa existiendo, pero sin constituir un movimiento social propiamente dicho.

Esta forma de expresión de las luchas populares se corresponde también con la extensión de la práctica del asociacionismo civil entre sectores importantes de las clases medias urbanas, la cual se manifiesta en la multiplicación de grupos ciudadanos orientados a la defensa de intereses o aspiraciones específicas, como la preservación de centros históricos, la preocupación por la seguridad pública, la lucha contra la contaminación ambiental, contra la corrupción y, en general, por todos aquellos aspectos que incluyen en la calidad de la vida cotidiana. Esa ampliación de horizontes de lucha y su carácter público han constituido un sistema de acción antes inexistente, en el que se le disputa al Estado el monopolio de la definición de la "buena vida" y se critica su ineficacia.

A su vez, estas formas de acción colectiva se corresponden también con el renovado interés que ha adquirido la lucha por la democracia local. En efecto, la vía de la competencia electoral por los gobiernos municipales se ha convertido en una forma privilegiada de emergencia de nuevas élites políticas locales y regionales y en la manera en que se manifiesta la aspiración ciudadana por un gobierno eficiente y controlable. Todo ello refleja la creciente centralidad del plano local como espacio de articulación de diversas formas de la acción colectiva.

Puede decirse también que esta nueva dimensión político-cultural ha traído como consecuencia la configuración de espacios públicos locales o especializados. En efecto, la importancia de la radio, de los –con frecuencia– minúsculos periódicos regionales y de los foros públicos ha crecido en la medida en que la problemática local ha adquirido una visibilidad y un potencial de cambio que la mayoría de los actores sociales no le otorgaban hasta hace poco tiempo.

En estas circunstancias, los analistas sociales aparecemos relativamente confundidos. Por un lado, acostumbrados a tratar con actores colectivos dotados de gran visibilidad y dirigidos por profesionales, parecería que el paso a la descentralización de las luchas sociales significa el colapso de la acción colectiva. La vieja adaptación del principio tourainiano a una lectura marxista –que los movimientos sociales propiamente dichos son aquellos que cuestionan la historicidad vigente (entendida aquí como el capitalismo)- obliga a pensar que los movimientos sociales en cuanto tales no existen más en el plano popular y en todo caso se reducen hoy a los que con rigor pueden calificarse como "nuevos movimientos sociales".

Sin embargo, si seguimos las enseñanzas de Alberto Melucci, quien ha subrayado con insistencia que los movimientos sociales no son homogéneos ni tienen necesariamente que adquirir una cualidad organizativa centralizada, y que son más bien expresiones simbólicas de un nuevo orden cultural emergente, habremos de reconocer que lo que está en marcha en el país es el surgimiento de

nuevos tipos de movimientos sociales que cuestionan el viejo orden político centralizado y la necesidad de intermediación política para expresar las aspiraciones sociales. En efecto, atestiguamos la búsqueda colectiva de una interlocución eficiente con los gobiernos federal y estatal, un esfuerzo por lograr gobiernos locales más responsables y una capacidad relativamente mayor de expresión de intereses y demandas por parte de los propios actores sociales sin la necesidad de una dirección política profesional como intermediación cultural. En ese sentido, podemos considerar que las nuevas formas de acción colectiva que están apareciendo en diversas parte del país, aún sin una gran visibilidad pública, constituyen en su conjunto un movimiento social en la medida en que cuestionan el viejo patrón de acción política y la centralización del poder.

Por supuesto, debe reconocerse que la mayoría de la gente ha optado por salidas individuales o familiares a la crisis, siguiendo el patrón natural de racionalidad inmediata que rige la reproducción social en condiciones de precariedad. Esto ha significado un reforzamiento por la vía del mercado de las alternativas populares a la crisis. La vitalidad de la emigración y la expansión brutal del sector informal confirman el hecho de que en un país como el nuestro la gente no se puede dar el lujo de no trabajar, y que la creatividad para buscar alternativas es extraordinariamente amplia. Por supuesto, junto con estas salidas de carácter mercantil se produce una refuncionalización de las lealtades familiares extensas y de las redes de paisanaje asociadas a la emigración por relevos, se reconstruyen los vínculos de confianza mutua en el mercado informal y emergen formas de asociación microempresarial que con frecuencia rebasan el ámbito de lo familiar y local.

Sin embargo, este recurso al privatismo como salida a la crisis no es contradictorio con la búsqueda de gobiernos locales eficientes ni con la defensa de bienes culturales colectivos como edificios históricos, la limpieza del ambiente, la defensa de los derechos individuales o la preservación de las tradiciones. A la atomización de los viejos agregados sociales se le puede oponer la emergencia de nuevas clases de asociacionismo basadas en la individualidad y en nuevas formas de identidad, que van desde ciudadanía más abstracta hasta el ecologismo del pequeño pueblo. La verdadera dimensión de este tipo de respuestas sociales está aun por ser estudiada.

Mientras esto sucede en los microespacios sociales, en el plano nacional se ha observado la emergencia de movimientos sociales que difieren radicalmente del patrón de acción de las décadas anteriores y que reflejan un cambio en los actores y los escenarios de la lucha social. Pueden señalarse por lo menos las siguientes innovaciones principales: la emergencia de las organizaciones no gubernamentales, la aparición de asociaciones cívicas en defensa y promoción de la democracia, la formación de agrupaciones de carácter gremial en el ámbito agrario y la creación reciente de un movimiento indígena nacional.

La creciente visibilidad de las organizaciones no gubernamentales (ONG) no sólo expresa el crecimiento de su número, sino la ocupación de nuevos espacios en la esfera pública, la aceptación de sus preocupaciones por parte de un amplio número de ciudadanos y una vocación protagónica de sus dirigentes. Si bien las

ONG son un fenómeno cuyo origen se remonta más de veinticinco años atrás, lo cierto es que fue a partir de los años ochenta que adquirieron una gran visibilidad y empezaron a incidir con fuerza en la definición de la agenda pública (Aguayo y Tarrés 1995). Dos factores fueron determinantes en este proceso: en los ochenta, el acceso creciente de las ONG al financiamiento internacional, y en los noventa, la sustitución paulatina del viejo concepto de servicio a los movimientos populares por una creciente profesionalización y una orientación a la definición de políticas sociales alternativas.

Las ONG constituyen otra vertiente resultante del viejo movimiento de radicalización estudiantil-intelectual de los setenta. De hecho, en su origen muchas de las ONG eran una forma secundaria de acción de grupos políticos de izquierda, o bien instituciones creadas por los sectores progresistas o radicalizados de la Iglesia, los cuales encontraron con rapidez correspondencia con algunas agencias financiadoras del exterior también administradas por intelectuales o grupos eclesiásticos progresistas. Sin embargo, a partir de 1988 el crecimiento del número de las ONG pasó a expresar un fenómeno relativamente distinto: la aparición de sectores medios urbanos que no encontraron acomodo a sus aspiraciones en los partidos políticos existentes ni forma de materializar su vocación de servicio dentro del sector público, que hasta entonces había sido capaz de absorber muchas de las iniciativas de cambio propuestas por intelectuales comprometidos con la promoción de la justicia social.

Por otra parte, las ONG también expresan la creciente importancia que los sectores ilustrados de las clases medias urbanas otorgan a los nuevos valores culturales que han emergido en los países desarrollados: el feminismo, el ecologismo, la lucha por la aceptación e integración de los homosexuales, y por los derechos de la niñez y las personas de la tercera edad, la protección en general de los derechos de las minorías y de los humanos.

Así, en México ha surgido una asociación conceptual entre los llamados en Occidente "nuevos movimientos sociales" y las ONG. En cierta forma, esta afinidad refleja que los movimientos culturales de nuevo tipo se han institucionalizado en México en la forma de organizaciones no gubernamentales, lo cual les ha dado cierta estabilidad y permanencia, recursos y presencia pública, aunque al mismo tiempo ello ha conducido a una cristalización de su dirección y a la generalización de una forma de práctica privatista. En efecto, las ONG son por su propia naturaleza pequeños grupos relativamente cerrados caracterizados por una administración personalizada y la falta de pluralidad política en su interior, aunque como conjunto podría considerarse que abarcan o representan distintas orientaciones políticas. Pero tomadas individualmente, las ONG constituyen una especie de pequeñas empresas no plurales y no abiertas que sólo como conjunto representan un movimiento social. En ese sentido, la forma de asociacionismo civil que practican es simultáneamente particularista y universalista. Particularista, porque las ONG constituyen agrupaciones cerradas que han llegado incluso a ser un sector económico. Universalista, porque promueven orientaciones culturales de carácter general y tienen la capacidad de cuestionar aspectos parciales del orden establecido.

En México se ha llegado al exceso de que los miembros de las ONG se conceptúen a sí mismos como la "sociedad civil" en general, y excluyan cualquier otra forma de asociación cívica de esta definición. El déficit analítico en este terreno es alarmante, no sólo por lo que respecta a la investigación académica de este fenómeno social, sino en lo que se refiere a la propia autocrítica de un sector que por su naturaleza intelectual debería practicarla de manera sistemática.

Otra novedad como movimiento social la constituyen las asociaciones que desde 1990 aproximadamente están luchando por la democracia. Este tipo de agrupaciones son también de carácter urbano-cultural y tienen su origen en una operación autocrítica de los grupos que desde mediados de los ochenta promovieron la defensa de los derechos humanos. En efecto, éstos se habían concentrado en sus primeros años en la defensa de los derechos de los inmigrantes centroamericanos ilegales, para luego extender su ámbito al campo de los derechos humanos de los mexicanos pobre y, por último, llegar a la conclusión de que los derechos políticos son también derechos humanos (Concha malo 1995). En este punto coincidieron con grupos de académicos y con algunos políticos que asumieron una actitud independiente, que configuraron así el cimiento de lo que en 1994 sería la Alianza Cívica.

A diferencia de las ONG, la Alianza Cívica fue políticamente plural, organizativamente abierta y acotó el ámbito de su actuación de tal modo que pudo adquirir un amplio reconocimiento público por su independencia. En 1994, representó una forma de asociación civil que expresaba un amplio y generalizado deseo ciudadano por una verdadera democracia electoral, un deseo compartido por muchos actores de muy diversa índole. (Olvera 1995)

Los retos de la rutinización y estabilización de un movimiento con una dirección un tanto informal, sin recursos ni personal en la provincia y muy requerido para todo tipo de apoyos o como legitimación a otras iniciativas sociales, han demostrado ser muy grandes para la Alianza Cívica. Además, el que la negociación de la reforma electoral se haya monopolizado en las direcciones partidarias tornó difícil para la Alianza Cívica mantener su ámbito de acción y encontrar uno nuevo que no forzara sus principios constitutivos. Sin embargo, puede considerarse que la Alianza Cívica ha sido un movimiento social exitoso en la medida en que logró colocar en la esfera pública la demanda por la democracia electoral y la necesidad de ciudadanizar el manejo del sistema electoral.

Por otra parte, en el ámbito agrario, donde se vivió a lo largo de la década de los ochenta una enorme crisis estructural, lograron emerger y alcanzaron un grado mínimo de consolidación dos organizaciones de carácter gremial que significan un nuevo tipo de movimiento social. Por un lado, está la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC) y, por otro, el Barzón.

La CNOC, nacida en 1988, es la primera organización gremial de pequeños productores agrícolas –en este caso en su mayoría de origen indígena– que no es dirigida por militantes de partidos políticos y que ha sido capaz de evitar en

caudillismo en su dirección nacional y de desarrollar al mismo tiempo una capacidad propositiva en materia de política sectorial. La CNOC es una organización gremial de carácter plural, pues sus miembros pertenecen a todos los partidos, descentralizados en la medida en que las asociaciones que la componen tienen un amplio margen de acción, y propositiva. Puede considerarse que la CNOC representa la emergencia de una nueva cultura asociativa en el ámbito campesino que critica las viejas formas de acción colectiva en el mundo rural (Olvera y Millán 1994; Hernández, e Moguel et al. 1992).

Por desgracia, en el contexto de la investigación en materia agraria ha habido poca atención a la naturaleza de estos procesos de cambio, los cuales, ciertamente, no son generalizables a todo el sector y ni siquiera a los planos regionales en los que actúan las organizaciones cafetaleras. Las variaciones regionales son enormes, por lo que al interior de la CNOC conviven las nuevas prácticas y principios y las viejas tradiciones políticas. Sin embargo, debe destacarse que la CNOC ha logrado mantener su perfil gremial en un contexto en el cual parecía que sólo los empresarios agrícolas o la tecnocracia profesional campesina que formó la UNORCA eran capaces de proponer políticas alternativas o luchar por los intereses sectoriales de sus agremiados.

El caso del Barzón es también muy relevante en la medida que ha significado la activación y movilización de un sector de la sociedad agraria que se había caracterizado por su pasividad y conformismo (Torres y Rodríguez 1994). Su generalización ulterior a las áreas urbanas marcó la posibilidad de una alianza entre actores económicos de las clases medias del campo y la ciudad que nunca antes se había presentado. Sin embargo, lo que el Barzón representó como innovación cultural en las formas de lucha y en la autopercepción de los actores sociales se vio parcialmente contrarrestado por la reproducción de viejas tradiciones políticas, como el faccionalismo y el protagonismo de los líderes.

El Barzón representa la emergencia de una nueva práctica asociativa (si bien de carácter defensivo) entre empresarios agrícolas pequeños y medianos, así como entre sectores de la clase media urbana hundidos en problemas crediticios en una época en que la ilusión de la entrada en la sociedad de consumo pasaron de súbito a la condición de delincuentes económicos. Al radicalizarse, el Barzón ha llevado a cabo una crítica explícita de la política económica neoliberal y, mostrando gran inventiva en las formas de movilización y recurriendo siempre a los instrumentos que ofrece la ley, ha sabido convertirse en un movimiento con potencial de permanencia y ha podido extenderse por todo el territorio nacional.

De esta forma, el Barzón ha constituido una innovación en tanto que ha cuestionado un aspecto de la política económica y desarrollado una capacidad propositiva en los planes jurídico y económico, y una continuidad, mientras que el faccionalismo y la centralización de la dirección en dirigentes casi profesionalizados ha conducido en casi todo el país a cierta dispersión organizativa y la pérdida de control sobre las actividades políticas de sus dirigentes por parte de las bases. El primer aspecto ha sido muy resaltado en los artículos disponibles sobre el Barzón, pero el segundo no ha merecido ninguna atención.

La emergencia del EZLN renovó el interés nacional por la cuestión indígena. Si bien en un principio el propio EZLN carecía de un programa en materia de derechos indígenas, en el curso de su negociación con el Estado logró procesar y consensar las demandas aisladas que diversos movimientos indígenas locales estaban defendiendo desde tiempo atrás. Las innovaciones culturales introducidas por el zapatismo son de todos conocidas, desde la introducción en la esfera pública de un lenguaje de matriz indígena y tono milenarista hasta el uso altamente simbólico y expresivo de las máscaras, las armas y la condición indígena misma (Hernández 1996). La guerra simbólica del EZLN en la esfera pública nacional e internacional es en sí misma una innovación extraordinaria.

Sin embargo, ha sido poco analizado que en realidad en torno al EZLN se han formado tres diferentes tipos de movimientos sociales. En primer lugar destaca el vasto movimiento de solidaridad desarrollado, a escala nacional, por un conjunto de ciudadanos urbanos, dispuestos a apoyarlo que ellos han percibido como una causa justa. Este caso es el primer ejemplo en muchos años de una solidaridad urbana de carácter nacional con actores populares agrarios. Este movimiento se fue acotando progresivamente hasta institucionalizarse en una forma no plural y no ciudadana en el actual Frente Zapatista de Liberación Nacional. Así, un movimiento que empezó siendo de solidaridad cívica, devino en un proceso de decantación y desgaste en un movimiento protopolítico cuyas esferas de acción y carácter aún no han terminado de definirse. No obstante, debe destacarse que el movimiento civil de solidaridad todavía existe y puede expresarse si la circunstancia lo requiriese.

El segundo movimiento es el de la intelectualidad de izquierda, que constituyó la larga lista de asesores del EZLN y que significó para muchos de ellos una nueva oportunidad de activismo político en un momento en que sus posibilidades de acción dentro del PRD o en otras esferas de acción pública estaban casi canceladas. Este movimiento logró acercar, entonces, a un grupo pequeño, pero significativo, de intelectuales a la dirigencia zapatista, lo cual ayudó a sistematizar el nuevo discurso de los derechos indígenas y a crear una corriente de opinión favorable al zapatismo en la esfera pública, además de propiciarle una dimensión internacional que de otra manera no habría tenido. Este acercamiento es de un nuevo tipo respecto al del pasado, pues no pretende dirigir al "pueblo".

El tercer movimiento es el propiamente indígena, el cual no existía como tal antes del lanzamiento. La posibilidad de conjuntar en un solo movimiento los variados intereses políticos y las distintas perspectivas étnico-culturales de las direcciones locales de las organizaciones indígenas surgió con la coyuntura abierta por la insurrección zapatista. A lo largo de los encuentros indígenas regionales y los nacionales en Chiapas y en la ciudad de México, así como en la negociación entre el EZLN y el gobierno, se ha concretado un programa de derechos indígenas y creado una conciencia nacional de unidad entre los distintos grupos étnicos, lo cual en conjunto configura un gran cambio político-cultural. Las características y condiciones específicas en que este movimiento se desenvuelve están siendo ampliamente estudiadas, y puede considerarse que el EZLN es el fenómeno social más debatido de los últimos tiempos en México.

No está por demás, sin embargo, señalar la evidente ambivalencia del EZLN en cuanto a su propia identidad como actor. En efecto, el EZLN no puede ser al mismo tiempo un actor político y un movimiento social indígena, so pena de reproducir la vieja práctica de la colonización política de los movimientos sociales.

Al hacer un balance de los movimientos sociales que emergieron en los noventa y de sus interpretaciones, podemos señalar las siguientes características sobresalientes.

1. Los movimientos sociales dejan de percibirse a sí mismos en términos fundamentalistas. La acción social tiende a separarse de la acción política.

2. Los movimientos sociales más importantes no son populares clasistas, sino culturales urbanos y, muy recientemente, de carácter étnico-cultural.

3. Los viejos dirigentes político-sociales profesionales y la intelectualidad radical se concentran más en la acción política que en la social.

4. La pérdida de centralidad de los grandes movimientos clasistas se corresponde con la creciente centralidad de acciones colectivas locales sectoriales y no políticas en la mayor parte del país.

5. Los movimientos sociales de carácter nacional se concentran en el ámbito cultural y en la lucha por la democracia, y adquieren un carácter autolimitado y tomando como eje de su propia identidad la noción de sociedad civil; así subrayan su diferenciación de la esfera política.

6. El análisis académico de los movimientos sociales tarda mucho en adaptarse a los cambios y en general testifica la derrota de las viejas ormas de la acción colectiva sin necesariamente percibir la emergencia de otras nuevas.

7. Hay un retraso considerable en el estudio de las innovaciones culturales que portan los movimientos sociales recientes y persiste la imagen de los movimientos como entidades homogéneas, lo cual disminuye el potencial analítico de los estudios realizados.

CONSIDERACIONES FINALES

El conjunto de procesos hasta aquí apuntados nos indica que ha habido en los años recientes una revaloración de la esfera social de acción, compuesta sobre todo por los siguientes espacios y prácticas: a) el reconocimiento de la importancia de apelar a y constituir la opinión pública, es decir, de la necesidad de comunicar ideas, principios y valores a la sociedad misma y no sólo ni prioritariamente al Estado; b) la exigencia a los gobiernos locales, estatales y federal de respeto a los derechos ciudadanos y eficacia en la gestión, sin que esto implique una lucha por o un cuestionamiento del poder político como tal; c) la búsqueda de consensos en la escala social para mejorar la calidad de vida, ya y ahora, con una serie de reformas radicales, sin esperar futuras revoluciones o la llegada de gobiernos providenciales.

En estas condiciones, que implican una profunda mutación cultural, han aparecido una diversidad de movimientos sociales que sin ser centralizados, y sin buscar ni tener permanencia en el tiempo o institucionalización organizativa, atacan problemas específicos en espacios acotados. La identidad colectiva como "sociedad civil" a la que muchos de ellos se asimilan remite al rescate de la cualidad no directamente política y no fundamentalista de su acción, y a la afirmación de su autonomía frente al Estado y a los partidos.

La valoración del potencial de cambio de estos movimientos, que son más difíciles de estudiar en tanto son mayormente locales y sectoriales, no permanentes y no del todo institucionalizados, depende de un cambio de perspectiva analítica que se centre en el potencial cultural de estas formas de asociacionismo civil y de sus probables efectos políticos en el contexto de nuestra inacabada e incierta transición a la democracia.

Para tal fin es conveniente situarse en el territorio de las recientes teorías de la sociedad civil. En efecto, tanto en el este y en Sudamérica, como en los países desarrollados, la invocación contemporánea a la sociedad civil refleja un deseo de diferenciación de la acción social respecto a la esfera política, al tiempo que crea una identidad colectiva que cruza las fronteras de clase y preferencia política. No estamos aquí en condiciones de analizar los aportes de una teoría de la sociedad civil a la comprensión de este fenómeno. Sin embargo, vale la pena apuntar al menos el sentido que los movimientos sociales asumen en ella.

En la perspectiva de Arato y Cohen (1992), la sociedad civil tiene dos componentes principales: por un lado, el conjunto de instituciones que definen y defienden los derechos individuales, políticos y sociales de los ciudadanos y que propician su libre asociación, la posibilidad de defenderse de la acción estratégica del poder y del mercado y la viabilidad de la intervención ciudadana en la operación misma del sistema; por otro lado, el conjunto de movimientos sociales que continuamente plantean nuevos principios y valores, nuevas demandas sociales, y vigilan la aplicación efectiva de los derechos ya otorgados. Tendríamos así que la sociedad civil contendría un elemento institucional definido por la estructura de derechos de los estados de bienestar contemporáneos, y un elemento activo, transformador, constituido por los nuevos movimientos sociales (Arato 1995).

Desde esta perspectiva, la sociedad civil sería un espacio en donde se general procesos de aprendizaje colectivo. Las asociaciones y movimientos general nuevas potencialidades culturales, las cuales son estabilizadas de una manera selectiva por medio de la creación de nuevas instituciones sociales, nuevas leyes, nuevos aparatos.

Sin embargo, sólo en Occidente los derechos fundamentales han sido efectivamente institucionalizados y al final extendidos en sucesivas olas de juridificación a los campos de las libertades y prerrogativas políticas sociales y económicas. En el resto del mundo dichas instituciones han sido adoptadas de manera formal, pero de hecho ignoradas o utilizadas sólo funcionalmente, como un nuevo instrumento de dominación. La ley ha sido usada como la garantía de la soberanía del Estado y no de la protección de los ciudadanos; con frecuencia el único espacio legítimo de acción social ha sido el propio Estado; la esfera pública ha permanecido en extremo débil y la idea misma de una sociedad autónoma ha sido rechazada de modo radical.

Así, la sociedad civil fuera del Occidente desarrollado debe entenderse como un movimiento y no tanto como una institución. Empero, aun en este nivel una corrección es necesaria. Los movimientos sociales de países sin las instituciones de la sociedad civil moderna son de dos tipos. Primero, movimientos sociales clasistas (clase obrera, campesinos, colonos urbanos), que fueron los movimientos históricos que en el mundo desarrollado lograron la extensión universal de los derechos civiles y políticos y la institucionalización de los derechos sociales. La ausencia virtual (o la aplicación segmentada o parcial) de esos derechos en el tercer mundo convierte a los movimientos sociales clasistas en actores fundamentales del proceso de democratización, entendido éste como la generalización de derechos y las formas de participación social e el control del sistema.

En términos histórico-comparativos, los movimientos clasistas han sido en el aspecto cultural menos influyentes, en el político menos autónomos y en lo social menos representativos en los países tercermundistas que en el Occidente. Esta misma debilidad explica en parte la carencia de derechos con aplicación universal y de justicia social elemental en América Latina. El desarrollo, crecimiento y fortalecimiento de los movimientos sociales clasistas es un proyecto no cumplido sin cuya actualización no será posible una verdadera aplicación universal de derechos y una estabilización de los mismos, aun en regímenes democráticos.

El segundo tipo de movimientos sociales son los urbano-culturales, muy parecidos a los de Occidente. Su particularidad es que se ven forzados a luchar por demandas como la democracia, la justicia social y el imperio de la ley; sin estas precondiciones todos sus reclamos por nuevos valores universales, estilos de vida o conceptos de progreso tendrían muy poco peso político, social y cultural. La política de la influencia (Cohen y Arato 1992: caps. X y XI), que es el mecanismo privilegiado de acción de los movimientos sociales de Occidente, requiere una esfera pública dentro de la cual se den a conocer las nuevas demandas sociales,

partidos modernos permeables a esas demandas, espacios sociales en donde nuevos estilos de vida puedan ser experimentados, una cultura pluralista que acepte lo nuevo y sea capaz de incorporar lo que deviene moral y socialmente en aceptable. Ninguno de estos factores predomina en América Latina o bien es operativo sólo para pequeñas élites, usualmente disociadas de la mayoría de la población.

Lo que estamos atestiguando en México es el desarrollo de movimientos sociales de carácter urbano-cultural que contribuyen a crear las disposiciones culturales y las instituciones de una vida pública democrática. En el proceso, han tendido a reforzar su identidad como "sociedad civil" para evitar su colonización política. Las posiciones van desde la actitud más antipolítica posible (que raya en el populismo y en el anarquismo) hasta la virtual instrumentalización política del liderazgo social. Al mismo tiempo, los movimientos clasistas casi han desaparecido de la arena pública, y algunos de ellos se encuentran en vías de una posible reconstrucción.

Los movimientos sociales en México se hallan así en medio de dos tendencias contradictorias: por un lado, el desarrollo del ethos público de la sociedad civil y el relativo avance hacia una democracia electoral apuntan a la consolidación de las instituciones políticas y la cultura pública de una sociedad civil moderna; por otro, la desintegración social propiciada por el neoliberalismo fomenta una debilidad extrema de los actores sociales clasistas que redundan en una anulación de facto de los derechos sociales, al mismo tiempo que la crisis terminal del régimen genera el riesgo de un regreso del autoritarismo abierto e impone una política de control sobre las organizaciones gremiales.

Cabe señalar, finalmente, que el análisis del potencial intrínseco de los movimientos sociales para estabilizarse a sí mismos, institucionalizar sus espacios de acción y adquirir permanencia exige una consideración crítica de los problemas de la heterogeneidad social y cultural de sus miembros, de las formas en que el poder y el conocimiento están interrelacionados en su vida interna, y de la naturaleza de las relaciones entre bases y líderes y entre éstos y el sistema político (Olvera 1995). Todos estos factores, cuya matriz común radica en los problemas de comunicación derivados del encuentro de diferentes culturas políticas locales (Lomnitz 1992), y variadas formas de conocimiento, tienen que ser analizados para poder hacer un balance de los potenciales y limitaciones de la sociedad civil en los procesos de democratización.

Valgan las anteriores reflexiones como una forma de acotar el campo de la discusión. Darle contenido y sacar sus consecuencias teóricas y prácticas sólo puede ser una tarea colectiva y a largo plazo.